

ECONOMÍA Y NEGOCIOS

Bruselas ampliará el Plan Juncker más allá de 2018 y fuera de la UE

CLAUDI PÉREZ, Bruselas
La Comisión Europea quiere dar un nuevo impulso al Plan Juncker, que aspira a movilizar inversiones por más de 300.000 millones hasta mediados de 2018. Bruselas anunciará

hoy que el proyecto se ampliará en al menos dos años adicionales, y aspira a convertirlo en algo permanente. El brazo ejecutivo de la UE buscará también financiar inversiones fuera de Europa, en zonas de conflicto y con

proyectos relacionados con la inmigración. El plan ha movilizado 100.000 millones en 26 países en su primer año, en línea con lo previsto, aunque con una concentración excesiva en países como Francia e Italia.

La economía europea no termina de arrancar. El PIB ha tardado ocho largos años en recuperar los niveles precrisis, lastreado por una deuda enorme y una inflación que no despegó y es el síntoma más evidente de una enfermedad económica nada fácil de curar. Y las recetas de política económica no funcionan: el BCE lleva más de un año con un programa multimillonario de compras de activos, pero Mario Draghi y los suyos piden desesperadamente inversión pública para complementarlo. Alemania no está por la labor; los demás no pueden. Solo Bruselas ha intentado movilizar recursos, con un plan de inversiones que parece la multiplicación de los panes y los peces: con unos 20.000 millones de fondos y garantías públicas pretende levantar más de 300.000 millones de inversión total en tres años, a través de proyectos rentables que atraigan al sector privado. El plan se estrenó hace un año en medio de grandes suspicacias. Bruselas, pese a las críticas, subraya que va en la línea prevista: en su primer año ha movilizado 100.000 millones en 260 proyectos de 26 países.

La Comisión subraya los "primeros signos" de recuperación de la inversión, que tras hundirse en los años de plomo de la Gran Recesión "continuará recuperándose gradualmente en 2016 y 2017, aunque sigue en niveles históricamente bajos", según un informe que será presentado hoy y al que ha tenido acceso este diario. "El plan no es una bala de plata", "no puede producir resultados inmediatos". Aun así, el brazo ejecutivo de la UE subraya los progresos conseguidos en áreas como la energía, el medio ambiente o las infraestructuras.

Bruselas no se ahorra la autocrítica: admite que hay una concentración excesiva en algunos

Francia e Italia, en cabeza

Francia e Italia son, de largo, los dos países que acumulan más proyectos financiados con apoyo del plan Juncker, por encima de 25. Les siguen distancia Alemania —con un déficit de inversión mil veces criticado por Bruselas— y, en quinta posición, España.

La energía es el sector estrella, con un 40% de los fondos. Le siguen el transporte (18%), el medio ambiente y la eficiencia energética (12%) y la I+D (10%) y los proyectos digitales (8%). Las infraestructuras sociales suman el 3% de los fondos.

países —básicamente, Francia e Italia—, en unos pocos sectores, y en pymes, más fáciles de movilizar. El primer año se ha beneficiado, además, de la puesta en marcha de inversiones que ya estaban en sus primeras fases de estudio. Pero Juncker no quiere quedarse ahí: el jefe de la Comisión presentará en otoño una propuesta legislativa para ampliar el plan más allá del horizonte temporal previsto (mediados de 2018). Según las fuentes consultadas, la idea es extenderlo al menos dos años más, con una potencia de fuego equivalente. Y buscar algo más ambicioso, incluso permanente, una vez se negocien los próximos presupuestos de la UE.

"A la vista de los resultados, el Fondo [Juncker] se reforzará y continuará más allá de los tres años previstos", según la evaluación de Bruselas, que insiste en el rol de ese proyecto "destinado a solucionar fallos de mercado y



El presidente de la CE, Jean-Claude Juncker, ayer. /JOEL SAGET (AFP)

movilizar financiación privada en inversiones cruciales para crear empleo, crecimiento y elevar la competitividad". Juncker pretende usar esa palanca incluso fuera de la UE: la regulación actual lo impide, pero Bruselas persigue incentivar las inversiones en la vecindad de Europa. Con un claro objetivo: países políticamente "frágiles" y áreas "posconflicto", para aprovechar ese vehículo en proyectos relacionados con la inmigración, una de las crisis mayores del continente.

Los datos muestran aún señales débiles de recuperación de las inversiones, muy lejos de los niveles históricos. La propia concepción del Plan Juncker limita sus ambiciones: persigue movilizar inversión privada, cuando instituciones como el BCE, el FMI y la OCDE hacen hincapié en la necesidad de que Europa refuerce su política fiscal y con ella la inversión pública. "Pero el primer año confirma que el vehículo es útil, y se ha ganado el derecho a formar parte de la caja de herramientas permanente de la Unión", aseguran fuentes comunitarias.

Reinversión

El informe de Bruselas demuestra que la cobertura geográfica y sectorial está demasiado concentrada. Pero a la vez, el plan ha permitido desatascar —al menos en parte— el Banco Europeo de Inversiones, que ha pasado a invertir 4.000 millones en proyectos de alto riesgo a "más de 20.000 millones anuales", según el citado estudio.

Juncker se reserva para su próximo discurso sobre el estado de la Unión, allá por el mes de septiembre, los detalles de la ampliación del plan, que tendrá que debatir con la Eurocámara y el Consejo Europeo. Pero su equipo ya apunta por dónde van los tiros. Por un lado, se reinvertirá el dinero de las garantías que salen del presupuesto europeo. Por otro, se modificará la estructura del plan: habrá más fondos para pymes —los que mejor han funcionado hasta ahora— y menos en infraestructuras, que está costando más activar. Y Bruselas flexibilizará el uso de fondos estructurales, para hacer más fácil esa opción y permitir más proyectos en los países que más los necesitan.

La Comisión ya patrocinó un cambio en las reglas de inversión de las aseguradoras para facilitar que entren en proyectos del Plan

España, entre los más atrasados en el programa de inversiones

J. S. G., Madrid
España es uno de los países más rezagados a la hora de aprobar proyectos del Plan Juncker, transcurrido el primer año del plan de inversiones impulsado por la Comisión Europea para tratar de reactivar la economía del continente sumida en una atonía desde hace años.

El Gobierno español ha aprobado proyectos por un importe total de 747 millones de euros, que supondrán una movilización

de fondos, entre inversiones públicas y privadas, de unos 6.400 millones, según los datos oficiales de la Comisión Europea (CE).

El plan de inversiones europeo que se extiende entre 2015 y mediados de 2018 pretende movilizar capitales por importe de 315.000 millones de euros en todos los países europeos para financiar proyectos de inversión.

Aunque España aparece en el quinto lugar entre los países que más proyectos han presentado al

plan de inversiones europeos, que se financian a través del Banco Europeo de Inversiones (BEI) y el Fondo de Inversiones Estratégicas, lo cierto es que está lejos del peso que le corresponde en función del peso que tiene la economía española.

El PIB español representa cerca del 8% del conjunto de la eurozona. Según este cálculo, España debería presentar proyectos por un importe total de cerca de 26.000 millones de eu-

ros. Es decir, casi 9.000 millones al año.

Sin embargo, hasta la fecha España solo ha presentado seis, por un importe de 505 millones, que movilizarán unos 2.000 millones. Y otros proyectos presentados por pymes y financiados a través de bancos intermediarios —en el caso de España se distribuye a través de Invercredy Venture Finance y la Compañía Española de Reafinanzamiento— por unos 242 millones de euros, que movilizarán recursos por 4.400 millones y beneficiarán a 17.630 pequeñas y medianas empresas, según los datos oficiales proporcionados por la Comisión Europea.

Fuentes comunitarias explican que España va por buen camino pero admiten que puede

hacerlo mucho mejor presentando proyectos con más peso. De hecho, esperan que en los dos próximos años que restan de esta primera edición del Plan Juncker, España pueda presentar más proyectos y más ambiciosos. Admiten, además, que en España el programa de inversiones no ha tenido éxito en la vertiente que financia proyectos para las pymes.

Seis grandes proyectos

El Plan Juncker cumple su primer año de vida el próximo julio. En este tiempo España ha presentado financiación para seis grandes proyectos entre los que se encuentran uno de biociencia impulsado por la farmacéutica cata-

Las críticas de los laboratorios de ideas

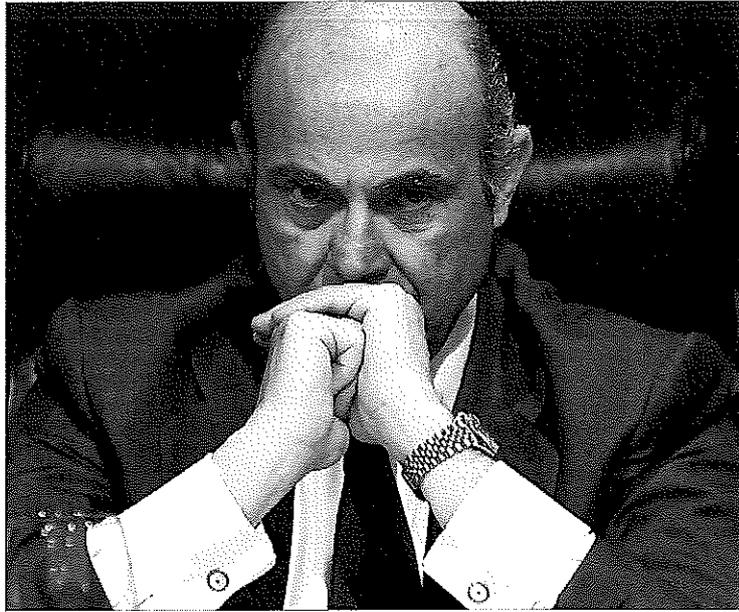
El vicepresidente comunitario Jyrki Katainen reivindicará hoy el éxito del Plan Juncker, pero los laboratorios de ideas no han ahorrado críticas en los últimos meses. En un análisis reciente, el Instituto Delors concluye que el plan "es insuficiente para solucionar la falta de inversión en Europa", que cifra en hasta 300.000 millones anuales, y pide a los Estados que "invierdan directamente en el capital del Fondo". La OCDE criticó en febrero que el plan iba muy retrasado, aunque las últimas cifras de la Comisión quitan fuerza a ese argumento, y exigió más activismo al BEI.

Junto con esos exámenes, el laboratorio de ideas Bruegel, uno de los más influyentes de Bruselas, se preguntaba hace unos días si el Plan Juncker ha invertido recursos en nuevos proyectos, o simplemente ha financiado con garantías públicas proyectos que la iniciativa privada ya iba a activar, y reclama más proyectos de infraestructuras e innovación.

Juncker: el próximo paso será flexibilizar también las reglas para los bancos, cuyas inversiones en infraestructuras consumirán menos capital.

"Ese plan lleva el apellido Juncker para que sea fácil señalar culpables si fracasa, pero de momento no ha fracasado", señaló el jefe de la Comisión el lunes en Luxemburgo. Bruselas pretende ahora dotar de mayor ambición y convencer tanto al sector privado, que de momento está respondiendo, como a los Estados miembros, que por ahora le han dado un apoyo tangencial. Las casas de análisis —Bruegel, Instituto Delors, OCDE— han sido críticas con el proyecto. Piden algo más. Quizá ese empuje adicional llegue en otoño, si Europa se convence de veras de que para salir de la crisis es imprescindible activar la inversión pública.

Ilana Grifols, que recibirá 100 millones de euros. Re Redaxis tiene aprobada otra ayuda de 160 millones para extender la infraestructura gasística en España. Además, se encuentran bajo evaluación otros proyectos de infraestructuras de transporte, y otro para la construcción de dos buques de combustible más eficiente para una compañía naviera española. La Comisión Europea analiza también un proyecto de capital riesgo para financiar infraestructuras de transporte, energía y otras obras sociales en España. Y mantiene pendiente de aprobar financiación para un fondo de inversión para nuevas tecnologías en España y Portugal.



El ministro de Economía, Luis de Guindos, ayer en una intervención pública. / J. J. GUILLET (EFE)

El Gobierno aspira a ahorrarse un ajuste de 4.500 millones el próximo año

J. SÉRVULO GONZÁLEZ, Madrid
El Gobierno en funciones del PP aspira a evitar un ajuste de unos 4.500 millones de euros —equivalente a unas cuatro décimas de PIB— en los presupuestos del próximo año. Para ello considera que sería suficiente rebajar el déficit público al 2,9% del PIB,

en lugar del 2,5% marcado por Bruselas. El Gobierno interino considera que si reduce los números rojos por debajo de la barrera del 3% saldría del procedimiento de déficit excesivo (PDE) y se liberaría del estrecho marcaje que la Comisión Europea ejerce sobre las cuentas públicas desde 2009.

La estrategia gubernamental solo sería posible si se mantiene el ritmo de crecimiento de la economía en el entorno del 3% del PIB como en los últimos trimestres. Los principales organismos y casas de análisis coinciden en que la economía avanzará con una cadencia ligeramente inferior a esa tasa pero con más inflación, lo que permitiría al próximo Gobierno alcanzar la meta de reducir el déficit por debajo del 3% sin apenas recortes el próximo año. Desde el Ministerio de Economía advierten de que habría que mantener el ajuste de este año, en el que se han aprobado acuerdos para reducir el gasto en 2.000 millones, casi toda esta cantidad afecta a obras de infraestructuras.

Con estas dos condiciones, el Gobierno podría ahorrarse un recorte extra de unos 4.500 millones frente a los algo más de 6.000 millones que espera Bruselas para rebajar el déficit público al 2,5% del PIB a finales de 2017. El caso es que el Gobierno interino considera que si deja el déficit por debajo de la sacrosanta barrera del 3% —el límite a partir del cual la Comisión Europea activa la tutela de las cuentas públicas— saldría del procedimiento del déficit excesivo (PDE), en el que se mantiene junto a Croacia, Francia, Grecia, Portugal y Reino Unido, y no tendría que llegar al 2,5%. Fuentes comunitarias recuer-

Reducir la deuda pública

Una vez que España escape del procedimiento correctivo por tener un déficit superior al 3% del PIB entrará en el proceso preventivo de la gobernanza europea que es casi más exigente, recuerdan fuentes comunitarias. Una vez en esta situación, Bruselas exigiría a España, una reducción de la deuda pública del 5% anual del exceso de deuda sobre el 60% que marcan los objetivos del pacto de estabilidad y crecimiento para 2020. España tiene ya una deuda del 100% del PIB. En el proceso preventivo, Bruselas exigiría rebajar la deuda en dos puntos porcentuales al año, un reto difícil sin inflación.

dan que este julio se revisarán las medidas a aplicar a España, entre ellas la posible sanción pendiente por el incumplimiento del objetivo presupuestario de 2015. El año pasado España tenía que reducir los números rojos al 4,2% y se desvió en casi 10.000 millones, hasta una cantidad equivalente al 5,1% del PIB. Las mismas fuentes

admiten que si España reduce los números rojos por debajo de ese límite del 3% apenas habría argumentos para mantener bajo los focos de vigilancia. Pero recuerdan que el límite oficial es bajar el desfase de las cuentas públicas al 2,5% del PIB en 2017. E insisten en que, además, los países deben hacer un esfuerzo estructural del 0,5% cada año.

Efectos del crecimiento

España deberá así reducir los desequilibrios presupuestarios en medio punto del PIB sin tener en cuenta los efectos del ciclo económico. Pero el Gobierno mantiene diferencias con Bruselas en el cálculo del déficit estructural y usará el crecimiento de empleo de los últimos trimestres para justificar el ajuste estructural.

Por eso, fuentes del Ejecutivo insisten en que apenas tendrán que aprobar nuevos ajustes. El ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos, aseguró el viernes que España quedará "fuera del brazo correctivo de la Comisión Europea" si mantiene el crecimiento económico en el entorno del 3%. De esta forma, el Gobierno espera que los efectos positivos del crecimiento (aumento de la recaudación y reducción de los gastos asociados al ciclo, como el desempleo) absorberán por sí solos el ajuste pendiente.

El déficit del Estado sube hasta abril por la caída de la recaudación

I. S. G., Madrid
El déficit público del Estado ascendió a 13.981 millones durante el primer cuatrimestre del año, unos números rojos que equivalen al 1,25% del PIB. Esta brecha entre gastos e ingresos públicos es unos 2.000 millones superior a la registrada en el mismo periodo del año pasado. El desfase presupuestario de la Administración central crece por la caída de la recaudación.

En los cuatro primeros meses del año, los ingresos no financieros del Estado ascendieron a 52.483 millones de euros, unos 3.500 millones menos que en idéntico momento de 2015. El Ministerio de Hacienda explica que esta caída se debe a los cambios normativos en el impuesto de sociedades. El Gobierno redujo el tipo del impuesto que grava el beneficio de las empresas del 30% de 2014 al 25% este año. Además, eliminó las medidas temporales aprobadas en 2012. Entre ellas, la supresión del pago fraccionado.

Sin pagos fraccionados

La Agencia Tributaria, que publicó ayer el informe mensual de recaudación, explica que en el primer pago fraccionado del impuesto de sociedades se ingresó la mitad que en 2015 por tres motivos: "Primero, los tipos del impuesto cayeron al entrar en vigor la segunda fase de la reforma; segundo, ya no están en vigor las medidas transitorias de años anteriores lo que supone menores ingresos por pagos a cuenta este año, pero mayores ingresos o menores devoluciones en la cuota diferencial del año que viene; tercero, el año pasado la privatización de AENA generó unos fuertes ingresos extraordinarios". Hacienda calcula que sin tener en cuenta este efecto en el impuesto de sociedades, el resto de los ingresos creció un 1,4%.

Por su parte, el Estado gastó 66.484 millones de euros entre enero y abril, lo que supone un descenso del 2,3%. La mayoría de las partidas de gasto del Estado se contraen.

Ayer también se publicó el déficit conjunto de las Administraciones Públicas que, sin los Ayuntamientos, equivale al 0,8% del PIB en el primer trimestre. Esta cifra supone un ligerísimo descenso sobre el de 2015.

España tiene que reducir el déficit del 5,1% de 2015 al 3,6% este año. Los datos muestran cómo las comunidades han reducido el déficit en comparación al mismo periodo del año pasado pero la Seguridad Social empeora sus datos respecto al primer trimestre de 2015.